



De nuevo los malos olores Fernando Cabral.-Desde hace unos días se están sucediendo periodos de mal o en la ciudad, un mal olor que recuerda a estiércol y que desde la delegación municipal de medio ambiente no se han dignado a señalar ni su naturaleza ni, mucho menos, su procedencia. El supuesto tratamiento antiolor nos está costando a los sanluqueños más de 100.000 euros anuales, porque al parecer Aqualia ha decidido que dicho tratamiento no entra en el pliego de condiciones de la concesión y el equipo de gobierno del PSOE de Víctor Mora, una vez más ha claudicado ante la concesionaria, haciendo dejación de la defensa de los intereses de los sanluqueños.

Del tratamiento antiolor solo sabemos el elevado coste para las arcas municipales y que el alcalde ha asumido sin rechistar lo más mínimo en una prueba más de la tradicional sumisión que muestra ante dicha empresa desde que se privatizó en servicio del ciclo integral del agua por valor de 16,5 millones de euros. Cantidad que se pudo emplear para eliminar los aliviaderos de la playa, pero que nadie en la ciudad puede comprobar en que hecho concretó se empleó.

En 2015, el Ayuntamiento pagó a Aqualia mas de 350.000 euros en obras, que para nada han servido para mejorar el servicio que presta la multinacional. Los presupuestos municipales de 2016, aprobados con dos manos por el alcalde, recogen obras para Aqualia por un valor de 958.000 euros, que servirán supuestamente para compensar el millón de euros que tiene que devolver la concesionaria por el cobro de más en los recibos del agua a todos los sanluqueños.

Los expedientes sancionadores a Aqualia, aún después de probarse los reiterados incumplimientos del pliego de condiciones que IU venia denunciando y que solo ha supuesto una ridícula sanción de 148,000 euros para la multinacional, ha sido un paripé que tanto el equipo de gobierno del PSOE y la empresa concesionaria han utilizado para limpiar sus caras.

Por tanto, nada nuevo bajo el sol, respecto al servicio del ciclo integral del agua que presta Aqualia y la actitud del equipo de gobierno del PSOE en su relación con la concesionaria.